

LUCIO OLIVER*

**CONFLICTOS Y TENSIONES
EN TORNO DEL ESTADO AMPLIADO
EN AMÉRICA LATINA**

**BRASIL Y MÉXICO ENTRE LA CRISIS
ORGÁNICA DEL ESTADO Y EL
PROBLEMA DE LA HEGEMONÍA**

INTRODUCCIÓN

Estudiamos la situación actual de Brasil y México a partir del análisis de la relación de fuerzas en el Estado ampliado en ambos países tomando en cuenta las tendencias generales que viven los Estados en la región. Se busca generar algunas hipótesis para interpretar el sentido y el alcance de los álgidos conflictos y tensiones en curso que las luchas y los posicionamientos de la sociedad civil (en sentido amplio) plantean a las estructuras de poder y a las fuerzas dominantes de la sociedad política en ambos países, manifiestos en las recientes protestas, luchas ciudadanas, movimientos sociales, posicionamiento de las organizaciones sociales y las expresiones de la opinión pública con respecto de los programas y las políticas de los gobiernos, así como su repercusión en los aparatos de gobierno, los órganos parlamentarios, los partidos, las estructuras de poder y los espacios públicos.

* Coordinador del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro y doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

UNA OBSERVACIÓN METODOLÓGICA

Primero que nada me interesa hacer una observación metodológica, crítica del enfoque constructivista, sumamente utilizado en los análisis recientes por sus aires renovadores y por sus logros en el estudio de los movimientos sociales. El acento de la crítica apunta a demostrar que las características y alcances de las luchas ciudadanas, los movimientos sociales, los posicionamientos político-partidarios no se explican suficientemente si sólo se considera la dinámica de la construcción subjetiva de la lucha social. El sostener que la acción social autoconstruye sus referencias, su programa, su identidad, ha sido un aporte al seguimiento abierto, no dogmático, de las nuevas formas de la práctica social¹. Sin embargo me parece que hay varios aspectos que dicho enfoque aún no considera y que podrían ayudar a comprender mejor el sentido, la incidencia y la dinámica de las luchas sociales:

1) La noción de historicidad, que alude a que la acción de las fuerzas sociales y políticas es el producto de una acumulación previa, de un *proceso* en el que las luchas y los movimientos son condensación de una historia de contradicciones y conflictos políticos, culturales o económico sociales y de una memoria social a través de la cual los grupos sociales se han ido constituyendo histórica y políticamente como *fuerzas*, siempre en relación con las otras fuerzas, esto es, la acción social, se ubica siempre como haciendo parte de una fuerza determinada y en una determinada *relación de fuerzas* (Gramsci, 1999, Cuaderno 13, notas 2 y 17);

2) Los conflictos se producen dentro de relaciones de poder estructuradas y con referencia a determinadas instituciones, es decir dentro de un determinado Estado ampliado y están relativamente condicionados por las estructuras de poder del Estado y por una determinada relación entre sociedad política y sociedad civil. Las relaciones de poder institucionalizadas crean las instancias y los espacios cristalizados de la relación política de fuerzas. En ese sentido, en el análisis de la acción social actual, incluso aquella que no se expresa por las vías institucionales, siempre cabe considerar las relaciones de poder institucionales y las formas ideológicas y culturales de la sociedad civil en las cuales

1 Un aporte importante al estudio de los movimientos sociales y luchas ciudadanas de América Latina está en el seguimiento que el Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO ha venido realizando desde 1999. Hay un elemento metodológico en la forma constructivista de abordar el problema por parte de la revista que discuto en este texto, considerando los elementos que los propios autores de la cronología política de OSAL vierten en diversos números de la revista.

aquella se desenvuelve: en el caso actual de América Latina, esas relaciones de poder están determinadas por la transformación reciente de los Estados periféricos bajo la globalización, que los ha transmutado de Estados nacional-desarrollistas en Estados transnacional-gerenciales y financieros de competencia (Oliver, 2005), reformados durante las décadas del ochenta a la del noventa para servir a la valorización del capital y que hoy sufren la influencia mayor o menor de un bloque oligárquico financiero transnacionalizado. Esos Estados establecen una relación de poder que afecta sin duda a la acción social mencionada, asedian su autonomía y alteran su proyección nacional.

Así, conviene considerar que los Estados latinoamericanos reformados son las formas políticas que han abierto las puertas para que el poder financiero global domine las economías nacionales, imponga una globalización unilateral y haya difundido por todos los medios la ideología y las políticas neoliberales mercantilistas, las mismas que hoy están en cuestión por las fuerzas políticas gobernantes en algunos países.

Empero hoy parece claro que ni las relaciones de fuerzas, ni la dominación del poder estatal son formas estructuralmente cerradas que impidan una acción social innovadora. Por el contrario, al incluirlas en el análisis de los procesos sociales vivos, de lo que se trata es de procurar ampliar el horizonte del estudio para desarrollar algunas hipótesis que permitan entender mejor el carácter, las formas, el alcance de la acción social reciente en América Latina, en un contexto estructural como el mencionado, y en la circunstancia coyuntural particular de la primera década del siglo XXI, en el que “el desgaste de los proyectos neoliberales se precipitó más rápidamente que la recomposición de las propuestas estratégicas y de las fuerzas organizadas alrededor de proyectos políticos populares” (Korol, 2007, 230).

Coincidiendo con Korol, un problema a destacar es lo que parece ser *la precariedad actual de las propuestas estratégicas y de las fuerzas organizadas* alrededor de proyectos políticos populares en función de las necesidades de su combate con las fuerzas organizadas en la estructura de dominación social y en el Estado. Y más que pensar en resolver esa precariedad a través de imaginar abstractamente cómo debían ser esas fuerzas populares, es decir más que centrarnos en el deber ser, el camino adecuado está, como señala Korol, en trata de dialogar con esos movimientos, luchas y fuerzas para interpretar su sentido, sus potencialidades y sus posibilidades ante la situación estructural dada (con un Estado político neoliberal y transnacionalizado presente), situación en la cual el problema parece ser la “insuficiencia” del grado

de organización y desarrollo político de las fuerzas organizadas del poder popular: “existe una distancia considerable entre el cansancio social hacia las políticas neoliberales y los procesos reales basados en la fuerza organizada del poder popular” (Korol, 2007, 230).

También queremos incluir en nuestro análisis la hipótesis de Nildo Ouriques en el sentido de que la situación de hoy nos convoca a pensar en que, más que una resistencia a los gobiernos y las políticas neoliberales latinoamericanas (situación que prevalece en México, Centroamérica –excepto Nicaragua que tiene una nueva fisonomía política–, República Dominicana, Colombia, Perú y Chile, lo que se manifiesta en el resto de países de América del Sur es una situación de *ofensiva política ideológica de las fuerzas nacional populares*, (Ouriques, 2007). Evidentemente ello obliga a pensar de otra forma, más abierta y más compleja, la relación entre sociedad política y sociedad civil.

Resumiendo, son cinco elementos metodológicos que cabe considerar en el estudio de la acción social latinoamericana actual: 1) la relación histórica y política cultural de fuerzas; 2) el Estado ampliado que alude a la relación orgánica y a la diferencia de expresión y situación entre la sociedad política y la sociedad civil; 3) las propuestas estratégicas; 4) las fuerzas organizadas del poder popular y 5) la situación de ofensiva político-ideológica de las fuerzas nacional-populares.

Aludo a las anteriores referencias metodológicas para pensar la situación de América Latina como región, pero los países que he seguido de cerca son Brasil y México, ámbito de mi investigación.

AMÉRICA LATINA

En América Latina las recientes luchas políticas y sociales han tenido una fuerte incidencia en el Estado, entendido en su sentido amplio, como expresión de una unidad orgánica “en crisis” de sociedad política y sociedad civil.

Desde 1999 se han agudizado notablemente los conflictos sociales y se han generalizado las luchas y movimientos sociales, hasta alcanzar un nivel no contemplado desde 25 ó 30 años atrás (cuando acontecieron los procesos revolucionarios impulsados por los gobiernos de Torres en Bolivia, Allende en Chile y posteriormente por el FMLN en El Salvador). No se trata de aseverar que hoy las luchas sociales en América Latina sean todas homogéneas ni tengan la misma cobertura e intensidad en los diversos países, sin embargo lo que parecen tener en común es que expresan el paso de la resistencia pasiva a una ofensiva activa de las fuerzas nacional populares. En su forma y en la relación de fuerzas en que se inscriben, las luchas

sociales recientes han tenido distintas expresiones, procesos, formas de acción social, diferentes objetivos y logros. Téngase como ejemplo las sucesivas luchas sociales antineoliberales en Bolivia del 2000 al 2007² que dieron lugar al gobierno de Evo Morales; en Argentina los acontecimientos críticos de los últimos meses del año de 2001, cuando aconteció un terremoto social que protestó contra el empobrecimiento, las políticas neoliberales, el dominio financiero transnacional y la corrupción de las instituciones (“Que se vayan todos”) (Svampa, 2005), fenómeno que puso en el gobierno al matrimonio Kirchner; en Venezuela, las luchas sociales desde el Caracazo de 1989 hasta 1999, en que asume el militar Hugo Chávez con orientación reformadora (Lander, 2007; Velázquez, 2008); en Ecuador, con el movimiento de la CONAI y los sucesivos conflictos políticos hasta llegar al gobierno Rafael Correa, un presidente con ideario socialista, en 2007 (Rodas Chávez, 2007). En Brasil surge y se consolida el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y en México aflora el Movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el movimiento Cívico de Resistencia al neoliberalismo y al fraude electoral denominado Convención Nacional Democrática (CND) y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

LAS EXPLICACIONES TEÓRICAS DE UNA CRISIS

La situación descrita arriba se expresó en una amplia variedad de crisis institucionales de los Estados latinoamericanos (en Venezuela, Bolivia, Argentina, México, Brasil, Ecuador, con mayor o menor intensidad). La noción de crisis alude a que las instituciones no fueron el cauce adecuado para que se expresase la mayor conflictividad, sino que en general fueron cuestionadas en mayor o menor medida por las protestas, luchas cívicas y movimientos sociales (sólo en los casos de Uruguay y más recientemente Paraguay las instituciones canalizaron los cambios de gobierno y los conflictos sociales). La alta conflictividad configuró un alejamiento de amplios sectores populares y medios de las sociedades respecto de la orientación de los gobiernos neoliberales³

2 Momentos álgidos de esas luchas acontecieron en abril del 2000 (contra el dominio transnacional del agua), en octubre de 2003 (contra el gobierno de Sánchez Lozada y el dominio de las empresas extranjeras sobre el gas), en mayo junio de 2005 (contra la sucesión de Vaca Dieguez, por la asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos) y en 2007 y 2008 (por la constitución, por las autonomías departamentales –demanda indígena y al mismo tiempo y con otro sentido de las oligarquías de oriente–).

3 Se les adjetiva de neoliberales aun cuando sean tremendamente estatistas a favor de la valorización del capital transnacional porque usan la bandera neoliberal para

y posneoliberales en algunos casos⁴, aun cuando la acción social de protesta y lucha esté suponiendo o haya implicado propuestas estratégicas claras ni la organización y desarrollo suficiente de las fuerzas populares. Estamos, sin embargo, ante la presencia sociopolítica y cultural de fuerzas históricas renovadas que cuestionan por medio de recurrentes luchas cívicas y movimientos sociales los proyectos sociales y estratégicos dominantes en los últimos veinte años del siglo XX. De particular importancia es que esas luchas han puesto en cuestión no sólo a los gobiernos sino en buena medida al conjunto de las *sociedades políticas* identificadas con los programas neoliberales de los Estados –burocracias afines a los Estados nacionales neoliberales periféricos de competencia (Hirsch, 2002; Oliver, 2005)– además de que tales luchas enriquecieron los derechos ciudadanos a la inclusión, a la nación, al desarrollo social y político autónomo, a la pluriculturalidad y la multisocietalidad (Tapia, 2006; García Linera, 2008).

Hay un elemento estructural de la crisis institucional de los Estados que tiene relación con la atenuación del carácter nacional de estos. Los Estados latinoamericanos abandonaron el perfil que tenían a mediados del siglo XX en tanto Estados nacional-desarrollistas, dirigidos por burocracias que afirmaban su compromiso con el desarrollo capitalista nacional, defensoras de proyectos de burguesías nacionales interesadas en salvaguardar y apoyar la acumulación nacional de capital y la expansión nacional popular del capitalismo. A partir de los años sesenta del siglo pasado se inicia un cambio en el carácter del Estado. Los sectores políticos dominantes se bifurcan entre sectores políticos nacionales en declive y las nuevas tecnocracias políticas transnacionales que enarbolan el proyecto transnacionalizador. A partir de 1982 se produce una derrota política de los sectores de compromiso nacionalista y de los pactos sociales populares y se imponen burocracias subordinadas a la globalización neoliberal y comprometidas con el cambio de patrón de acumulación interno reorientado hacia un nuevo patrón de neoexportación de especialización productiva (Sotelo, 2007; Osorio, 2008), con el aval y la coparticipación de los capitales transnacionales, los diversos gobiernos y grupos políticos dominantes de Estados Unidos y con el beneficio del impulso que produce la reestructuración del capitalismo mundial y la globalización del capital.

Como coinciden muchos investigadores, lo antes dicho genera una situación de neo-oligarquización interna de los Estados que como lo de-

abrir, desregular las economías nacionales, para recortar el gasto público para políticas sociales y para permitir la sobreexplotación de la mano de obra nacional.

4 Como parece ser el caso de la Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula.

muestran los acontecimientos posteriores, contraponen las nuevas élites y sectores dominantes al conjunto amplio de la sociedad. El Estado ve estrechada su base de apoyo económico y político y se produce un fenómeno de exclusión social inusitado, una de cuyas expresiones es la duplicación de la población en condición de pobreza y de pobreza extrema.

Sin embargo el impulso que genera la globalización como proceso de ingreso de nuevos capitales y de transformación productiva de múltiples industrias y ramas económicas que se vuelcan a la exportación y la importación, genera una ampliación del consumo de masas y una modernización de la vida social, en un contexto de desindustrialización nacional, rompimiento de las cadenas productivas internas y dos décadas perdidas para el crecimiento económico (los años ochenta y los noventa que la CEPAL denominó perdidas por el estancamiento económico productivo interno). Esa desnacionalización y la neo-oligarquización del Estado ya de por sí constituyeron elementos de crisis orgánica debido a que el Estado nacional dejó de expresar la lucha de fuerzas internas, para ser una expresión unilateral del dominio mundial del capital, y las políticas económicas de los Estados latinoamericanos se transformaron en vehículo de la valorización internacional del capital (Hirsch, 1996). Pero la situación estructural no se expresó como real inconformidad política sino hasta la primera década del nuevo siglo:

[...] a partir de los años noventa, los movimientos sociales expresan una participación más general y más definitiva de la sociedad civil. Anteriormente, exceptuando a los movimientos por la democratización político electoral, la mayoría de los movimientos estaban ligados a procesos vinculados a intereses sociales de segmentos amplios, pero enarbolados básicamente por activistas minoritarios; hoy día los movimientos sociales conjuntan la participación de grandes sectores de la sociedad, logran tener una visión más clara de la importancia de que el trabajo político ideológico se realice en la sociedad civil y de los límites de las transformaciones en los parlamentos y en la sociedad política. El peso de los movimientos sociales en la oposición radical al neoliberalismo aparenta ser mayor y más claro que los movimientos anteriores, cuyos objetivos estaban más encaminados a modificar las instituciones y las leyes y actuar en la institucionalización de la esfera política (Oliver, Salles, Carleial, 2008).

No se trata, sin embargo de que haya aflorado con el fin del siglo una oposición entre sociedad civil libertaria y sociedad política opresora como tales, sino de la lucha de distintos proyectos (Dagnino, 2006) tanto en la sociedad como en el Estado, que incluye la conflictividad entre los grupos políticos dirigentes en y de ambas dimensiones.

Podemos proponer una valoración de esa conflictividad como un hecho empírico importante, a partir de que con la mundialización del capital y la transformación de los Estados en América Latina se ha intensificado la conflictividad dentro y fuera del espacio institucional político. Pero también conviene apreciar este fenómeno desde un punto de vista teórico histórico, sosteniendo que la profundidad de esa conflictividad permite arriesgar la hipótesis de la existencia de una crisis orgánica de los Estados latinoamericanos tal como lo sostiene Raúl Prada, investigador boliviano: “Estamos asistiendo desde septiembre de 2000 a la crisis múltiple de la República; una crisis económica, una crisis política, una crisis del Estado, una crisis de la democracia formal” (Prada, 2008)

Crisis del Estado que no sería necesariamente la antesala de grandes reformas, de una revolución o de un nuevo estadio histórico, sino que podría bien ser eso u otra cosa, por ejemplo, una reformulación regresiva del papel histórico del Estado en América Latina, reformulación que redefine lo nacional y lo popular como base del Estado, pero restringiéndolo, tal como aconteció con los Estados oligárquicos del siglo XIX. A partir de esa crisis del Estado nacional desarrollista, el nuevo Estado (contra) reformado pasó a ser un Estado desnacionalizado, de derechos restringidos, de ciudadanía privilegiada o sin derechos universales, en el cual el nacionalismo pasó a ser sólo un simbolismo abstracto y la democracia una forma política vacía de contenidos y sin participación real de la población.

En los casos en que la lucha social puso al Estado bajo la dirección de fuerzas populares renovadas se abrió la posibilidad de reconstruir el Estado en un sentido nacional popular de democracia participativa y de espacio público abierto, capaz de reconstruir la economía y la política.

La ventaja de abordar el problema de la situación de los Estados Latinoamericanos a partir de una teorización es que podemos intentar comprender la lucha de fuerzas como lucha histórica social, sin que ello signifique que esté predeterminada y cerrada, sino que admite la posibilidad, tal como lo establece el análisis constructivista de la acción social, de ser una lucha donde el programa político, la identidad de los actores, la convocatoria a distintos sectores sociales, se produce en la lucha misma, pero dentro de un contexto de Estado ampliado determinado.

Al incluir el estudio de las fuerzas como fuerzas histórico-sociales en desarrollo y confrontación se trata de intentar comprender la forma en que se despliega la lucha por la hegemonía y la cuestión de la creación de una voluntad colectiva nacional popular por las fuerzas dirigentes.

Sobre el estudio de la relación de fuerzas, Gramsci dice lo siguiente al respecto:

[...] en el estudio de una estructura hay que distinguir los movimientos orgánicos (relativamente permanentes) de los movimientos que se pueden llamar de coyuntura (y se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales. [...]) Los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social, que afecta a las grandes agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. [...] Tiene lugar una crisis, que en ocasiones se prolonga por decenas de años. Esta duración excepcional significa que en la estructura se han revelado (han llegado a su madurez) contradicciones incurables y que las fuerzas políticas operantes positivamente para la conservación y defensa de la estructura misma se esfuerzan todavía por sanar dentro de ciertos límites y por superarse. Estos esfuerzos incansables y perseverantes (porque ninguna forma social querrá nunca confesar haber sido superada) forman el terreno de lo ocasional sobre el cual se organizan las fuerzas antagónicas que tienden a demostrar (demostración que en último análisis sólo se consigue y es verdadera si se convierte en nueva realidad, si las fuerzas antagónicas triunfan, pero que inmediatamente se desarrolla en una serie de polémicas ideológicas, religiosas, filosóficas, políticas, jurídicas, etcétera, cuya concreción es evaluable por la medida en que resultan convincentes y transforman el alineamiento preexistente de las fuerzas sociales) que existen ya las condiciones necesarias y suficientes para que determinadas tareas puedan y por lo tanto deban ser resueltas históricamente (deban, porque todo incumplimiento del deber histórico aumenta el desorden necesario y prepara catástrofes más graves).

El error en que se cae a menudo en los análisis histórico-políticos consiste en no saber encontrar la justa relación entre lo que es orgánico y lo que es ocasional: se llega así o a exponer como inmediatamente operantes causas que por el contrario son operantes mediatamente, o a afirmar que las causas inmediatas son las únicas causas eficientes; en un caso se tiene el exceso de economicismo o de doctrinarismo pedante, en el otro el exceso de ideologismo; en un caso se sobrevaloran las causas mecánicas, en el otro se exalta el elemento voluntarista e individual [...] (Gramsci, 1999, Cuaderno 13, nota 17).

La hipótesis de trabajo es justamente la de la crisis orgánica del Estado capitalista latinoamericano, expresada en la maduración de contradicciones de distinta naturaleza: una, de carácter estructural interna en las sociedades de la región, que aflora con el cambio a los Estados neoliberales en los años ochenta y que tiene que ver con su nueva definición transnacional financiera y gerencial, se expresa en que el Poder Político entra en desavenencia con lo que antes era su base político-nacional amplia, lo que se traduce en la maduración de

una segunda contradicción: la histórico-política y que toma cuerpo en el lento proceso que lleva de repente a una conflictividad exacerbada planteada por las sociedades civiles en movimiento, protesta, lucha cívica, lucha social y nacional, movimientos de sentido histórico y político renovado, en tanto no son ya las sociedades identificadas con los proyectos nacional-desarrollistas capitalistas previos, frente a las sociedades políticas dominantes en las últimas dos décadas del siglo XX, que impulsaron y aplicaron los proyectos neoliberales, limitantes de la representación y deformadoras de la participación y que se apoyan en los sectores oligárquicos y minoritarios transnacionalizados, dirigentes de sectores importantes de la sociedad civil, desplazados ya en algunos países. La expresión álgida, sociopolítica, se presenta como crisis política. Así la mencionada crisis orgánica del Estado se manifestó como crisis política abierta a inicios de la década (1999-2005) y generó cambios políticos en siete países de América del Sur –la mayoría–: Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

En los otros países lo que se hubo consolidado es una nueva contrarreforma política preventiva en marcha de mayor o menor amplitud. En Chile, Perú, Colombia, Centroamérica, República Dominicana y México la conflictividad social producto de la crisis orgánica del Estado se ha mediatizado por las políticas de contención de las clases políticas dominantes y debido a condiciones particulares que han mantenido la adhesión de amplios sectores sociales al modelo neoliberal, no obstante éste exprese los intereses de minorías oligárquicas. Ahí presenciamos la influencia de particularidades que tienen que ver con el dinamismo que ha provocado la mayor presencia de capitales externos, los impulsos económicos producidos por las nuevas economías de neo-exportación de especialidad productiva, las maquiladoras, la migración, el narcotráfico, la cooperación internacional por la vía de las ONG, así como por los recursos externos de apoyo a las políticas de represión y posterior cooptación que las sociedades políticas dominantes han hecho de los sectores populares de las sociedades civiles. También por la atomización y fragmentación de dichas sociedades en esos países.

Para analizar las expresiones sociopolíticas de la crisis orgánica de los Estados latinoamericanos podemos acudir a diversas perspectivas de análisis que en cierta forma están ubicadas en la idea de la historicidad de la confrontación: una de ellas ha sido desarrollada por el proyecto de investigación latinoamericanista de Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (2006), quienes sostienen que América Latina vive *una disputa de proyectos* que tienen un lenguaje similar pero que están vinculados con fuerzas distintas. Por un lado el per-

sistente y dominante proyecto neoliberal, burocrático, despolitizador, con ciudadanía formal, basado en el eje del mercado, pero que se expresa con enunciados modernos de democracia y ciudadanía; otro, el proyecto democrático participativo popular, societal, que busca reformar lo público abriendo paso a una acción sociopolítica popular no burocrática, con luchas por la ciudadanía real colectiva e individual. Un tercer proyecto es el proyecto autoritario que surge como política de emergencia del Estado ante las dificultades del proyecto neoliberal y que expresa la dificultad de las fuerzas políticas dominantes para imponerse exitosamente y para obtener la hegemonía.

Una explicación particular vinculada a la misma perspectiva anterior es la de Nelson Coutinho (2000), centrada en Brasil pero extensible a las otras sociedades, que si bien asume la idea de la confrontación de proyectos considera que las nuevas fuerzas nacional-populares ya tienen construido un perfil de democracia de masas con contenido popular en plena vigencia.

Lorenzo Meyer (2007), por su parte, busca la explicación del creciente autoritarismo de Estado mexicano en el acentuamiento de la crisis orgánica del Estado, a partir de la decisión política del anterior gobierno de Fox de hacer prevalecer el proyecto neoliberal a toda costa, sin modificar las instituciones heredadas del régimen de Partido de Estado, y en las políticas de emergencia y continuidad del dominio neoliberal empresarial bajo el gobierno de Felipe Calderón, que se impone con el apoyo de los militares incluso a costa de perder la legitimidad ante las luchas ciudadanas y sociales que reclaman del fraude de las elecciones del 2006.

LA LUCHA POR LA HEGEMONÍA

No obstante lo mencionado, la oposición entre sociedad civil y sociedad política no es polar, en ambos espacios existen distintos posicionamientos y una pluralidad de posiciones, es decir hay en el interior del Estado ampliado (sociedad política + sociedad civil) latinoamericano una aguda lucha por el dominio y la hegemonía entre fuerzas distintas que hacen parte de la crisis orgánica del Estado. No obstante, se observa una tendencia al declive de la hegemonía neoliberal en la región, dado que este proyecto ya no es hegemónico como en las dos últimas décadas del siglo pasado, cuando en general las sociedades políticas de los Estados latinoamericanos, y las sociedades civiles bajo su influencia, asumieron las directrices del consenso de Washington y la abertura neoliberal guiadas en general por políticas de gobernabilidad autoritaria (Salinas, Menem, Cardoso, Andrés Pérez, Sánchez Lozada, Martín Torrijos). Justamente por el declive de la hegemonía neoliberal es que se presentan dos situaciones distintas en América Latina: por

un lado el paso a una ofensiva de las fuerzas nacional-populares que, empero, aún no son hegemónicas y que por su lucha a través de gobiernos y de movimientos sociales han abierto múltiples disyuntivas y planteado problemas nacionales y sociales sin resolver, que forman el terreno actual de la conflictividad latinoamericana especialmente en los países del sur de la región.

Por otro lado tenemos la situación en la que las fuerzas neoliberales han reaccionado ante su declive y ante la ofensiva antineoliberal con políticas de seguridad autoritaria diversas, que buscan oponerse activamente a las fuerzas populares y que han delineado una política regional de contrarreforma democrática de seguridad militarizada, como son los casos de Colombia en primer término y México, donde se está abriendo paso una política de esta naturaleza.

Cabe considerar con mayor amplitud lo que está aconteciendo en el espacio de las sociedades civiles latinoamericanas. Después de haberse entusiasmado anteriormente con las políticas neoliberales y haberse involucrado con la ideología neoliberal, es decir después de un corto periodo de enamoramiento neoliberal que va de 1982 a 1999, a inicios del nuevo siglo, se produjo un desencanto sorprendente. Las fuerzas populares de la sociedad civil se volcaron a la resistencia y protesta contra las políticas transnacionales y al calor de su movilización las sociedades desarrollaron experiencias significativas de defensa y reclamo de derechos, ciudadanía colectiva, poder local comunitario, democracia participativa, nación incluyente y de diversidad cultural, que habían sido ignorados o rechazados durante las dos décadas y media anteriores por los gobiernos latinoamericanos.

Son significativos entretanto los cambios habidos también en varias de las sociedades políticas de la región⁵ y que han modificado la fisonomía política de América Latina en el mundo, poniéndola a la vanguardia de la resistencia al neoliberalismo y de la ofensiva nacional popular bajo la globalización.

En cuanto a los gobiernos que buscan modificar la relación de fuerzas y han hecho suyos el proyecto nacional popular de democracia participativa, los tres más destacados son el de Venezuela, el de Bolivia y el de Ecuador, en tanto los otros buscan transformaciones paulatinas y de un carácter más limitado, tales como los de Brasil, Argentina y Uruguay. Nicaragua y Paraguay, por su parte, son experiencias demasiado recientes para ser incluidas en uno o en otro tipo de gobiernos.

5 Dos textos interesantes que abordan los cambios políticos son el coordinado por la investigadora Beatriz Stolorowicz (2007) y el coordinado conjuntamente por Nayar López Castellanos y Lucio Oliver (2008).

Los proyectos que buscan modificar la relación de fuerzas tienen ante sí el reto de la construcción de una hegemonía y la desestructuración de las relaciones de dominio y hegemonía anteriores. En ese sentido el desafío para estos nuevos gobiernos está en transformarse en fuerzas dirigentes nacional populares, esto es en prohijar una mayor participación popular e involucrar en su lucha por un nuevo proyecto de Estado y de economía a las fuerzas políticas populares no incluidas y a las grandes mayorías sociales en sus distintos componentes: las clases medias, maestros, obreros, indígenas, campesinos, intelectuales, los cuales tienen una historia de subordinación a las clases dominantes anteriores y cuyos dirigentes sociales, políticos y culturales no son de natural proclives a los cambios propuestos, especialmente las clases medias y los intelectuales.

En Venezuela, el gobierno de Chávez reorganizó a la sociedad política y está arrastrando a los sectores populares de la sociedad civil, los que sin embargo no parecen acompañar la rapidez ni las formas que está imponiendo el proyecto de socialismo de siglo XXI de Chávez (López, 2004), el cual no obstante ser un verdadero terremoto político social al interior de ese país, se basa excesivamente en la producción y exportación de petróleo y no parece ser novedoso como proyecto estratégico de transformaciones socialistas ni en lo político ni en lo económico. Incluso algunos investigadores lo han caracterizado de "socialismo rentista" (Lander, 2007; Velázquez, 2008; Azzellini, 2008; Briceño-León, 2008) el cual tiene frente a sí la resistencia permanente de los empresarios, de los dueños de los medios de comunicación, de algunos gobernadores y las clases medias tradicionales, cuidadosamente construida con el apoyo de los Estados Unidos.

Una segunda experiencia significativa de viraje de la sociedad política es la de Bolivia (Vargas y Córdova, 2004), que ha podido encarar, a partir de la dirección conjunta del gobierno de Evo Morales con los movimientos sociales dirigidos por el Movimiento al Socialismo, una Asamblea Constituyente para transformar la institucionalidad política y proponer un proyecto nacional nuevo, con una revolución campesino-indígena milenaria de por medio, que junto a grandes expectativas, ha abierto muchas oposiciones regionales, sociales y culturales al interior del país: de las oligarquías, los sectores organizados de los maestros y obreros mineros, los intelectuales y las clases medias, por lo que el proyecto no termina por configurarse ni por estabilizarse, se encuentra en medio de una crisis catastrófica y en un punto de bifurcación (Moldiz, 2007; Gutiérrez y Mokrani, 2008; Stefanoni, 2008; García Linera, 2008; Prada Alcoreza, 2008)

El gobierno de Ecuador parece estar iniciando su propio camino, con peculiaridades que no tardarán en hacerse evidentes, pero

que tiene como problema principal conjuntar la acción sociocultural y política independiente de los indígenas, agrupados en la CONAI, y las fuerzas de transformación socialista del nuevo gobierno (Rodas Chávez, 2007; Correa, 2008).

Los casos de Brasil, Argentina y Uruguay se presentan como proyectos de gobiernos progresistas, neodesarrollistas, que no han abandonado su adhesión a las políticas económicas neoliberales y carecen de una política estable y real de convergencia con las luchas de las sociedades civiles en la medida en que desarrollan sus políticas en el interior de instituciones legislativas cuestionadas, retrógradas, que no son canales abiertos para la participación autónoma con plenos derechos de las sociedades civiles (Turra, 2008; Rodríguez Mora, 2008; Svampa, 2005; Elías, 2007). Ello ha propiciado en estos países el desencanto y la crítica de destacados intelectuales de los movimientos sociales o de las posiciones críticas del neoliberalismo, no sólo por la cuestión programática económica como sobre todo por la alusión a la pérdida de politicidad de la sociedad civil (Francisco de Oliveira, José Stedile, Atilio Borón, Alcides Beretta, entre otros).

Un elemento particular de la situación del Estado ampliado bajo estos proyectos políticos de izquierda y centro izquierda es que los movimientos sociales son los que con sus luchas han construido una agenda política autónoma de resistencia y alternativa al neoliberalismo que reclama democracia participativa, poder local colectivo y popular, recuperación de lo público, derechos territoriales de las comunidades originarias, derecho originario a los recursos naturales, derecho a la diversidad cultural, políticas de desarrollo nacional incluyente, etc., y que tienen particularidades que los diferencian de los movimientos sociales de otros momentos, tal como yo mismo lo comentaba recientemente⁶:

[...] en el nuevo ciclo de los movimientos sociales latinoamericanos encontramos particularidades importantes relacionadas con formas de lucha más agresivas y confrontativas, así como con la constitución de nuevos sujetos populares cuya fisonomía viene de elementos identitarios comunitarios o culturales y que se forjan como tales en coaliciones sociales amplias (que incluyen a los viejos actores sociales, pero que los desbordan) y que, con la radicalidad de sus luchas y sus agendas políticas, se están planteando problemas como:

1. Originales demandas de radicalidad democrática basada en la participación colectiva y de los individuos;

⁶ Ideas expresadas en la tercera clase impartida por mí en el curso a distancia, "Movimientos sociales y luchas democráticas en América Latina", de CLACSO, octubre de 2007.

2. Nueva determinación de lo público del Estado a partir de la sociedad civil;
3. Los puntos anteriores están evidenciando una propuesta de una desconocida construcción del poder desde abajo que caracteriza a las experiencias político-sociales de los movimientos que no buscan simplemente la toma o la huida del poder;
4. Reapropiación colectiva del territorio bajo una nueva concepción de la apropiación territorial;
5. Nuevo internacionalismo, que expresa una coincidencia política social amplia de resistencia y alternativas, que se asienta en la convergencia de objetivos, formas de lucha, aspiraciones y críticas de movimientos sociales heterogéneos (Seoane, Taddei y Algranati; 2006)⁷.

LA SITUACIÓN DEL ESTADO AMPLIADO EN BRASIL Y MÉXICO

En Brasil y México las luchas sociales y ciudadanas de resistencia al neoliberalismo se han tendido a expresar por medio de dos grandes vertientes (Dagnino, Nobre, Fiori, Oliveira, Bartra, Meyer, Oliver, Ortega). Por un lado, la acción ciudadana, orientada en general a exigir la aplicación de los derechos constitucionales y a influir en las contiendas electorales, lo que en Brasil llevó en los años ochenta y noventa a diversas luchas por la ciudadanía y contra el hambre y en las elecciones del 2002 al triunfo en la presidencia al líder obrero del Partido de los Trabajadores, PT, Luiz Inácio Lula da Silva. En México, como resultado de la derrota de la izquierda en las luchas sindicales antineoliberales de los ochenta y debido al desánimo que generó el gran fraude electoral de 1988, la lucha ciudadana se realizó bajo la dirección nacional de una derecha reaccionaria profundamente identificada con el proyecto neoliberal, lo que generó resultados políticos totalmente distintos al Brasil; no obstante, en el mismo proceso la fuerza de centroizquierda logró canalizar las luchas ciudadanas al triunfo en el gobierno de la capital del país, lo que introduce matices y algunos límites al gobierno nacional de la fuerza de derecha. Si bien el PAN logró la derrota electoral del viejo partido de Estado, Partido Revolucionario Institucional, PRI; en el caso del gobierno federal, no significó la recuperación por el gobierno nacional de la acción política soberana y el desplazamiento del Estados nacionales de competencia, y tampoco un proyecto político nacional de acumulación y regulación política en la inserción de México en la Globalización. Por el contrario, afirmó la vinculación

7 También véase el libro que publicó CLACSO en 2004 compilado por José Seoane, *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, que resulta muy ilustrativo ya que incluye muchos casos nacionales en los que se describen y analizan movimientos sociales significativos.

subordinada y dependiente con los Estados Unidos y la amplió a la esfera militar-regional.

En ambos países, cabe destacar que las luchas ciudadanas han logrado avances sustanciales en el reconocimiento de derechos sociales, políticos y culturales de la población, aun cuando bajo el proyecto nacional neodesarrollista de Lula da Silva ese reconocimiento es más amplio y definido que en México, país en el que prevalece un proyecto empresarial de transnacionalización y donde se dejó sin hacerse la reestructuración institucional que estableciera formas políticas y mediaciones nuevas capaces de sustituir a las que prevalecieron bajo el régimen de presidencialismo despótico en la época de dominio del PRI.

Un elemento común de ambos países es la caducidad de sus instituciones políticas, en particular la persistencia del presidencialismo semicorporativo y la composición subordinada y corrupta del parlamento, dominado por partidocracias y élites políticas autonomizadas de los ciudadanos.

En Brasil el proyecto de Lula tiene un filo antineoliberal y anti-transnacional, en el sentido de que se propone recuperar la regulación estatal nacional de la economía y la política, en tanto en México el proyecto del presidente Calderón es abiertamente neoliberal y transnacional. La diferencia de proyectos no significa sin embargo que se haya abierto paso en el Brasil lo que Dagnino considera un proyecto de democracia participativa con desarrollismo nacional-popular. Y no ha sido así precisamente porque con Lula se mantuvo la autonomía y el dominio de las viejas estructuras de poder y el control de los órganos de gobierno y representación sobre la sociedad civil, no obstante que se han abierto paso algunas situaciones excepcionales que tienen que ver con la participación de la población en los consejos de políticas sociales de salud y de seguridad alimentaria.

En México la continuidad de las instituciones que prevalecieron en el período de hegemonía del Estado nacional desarrollista dirigido por el PRI ha ratificado la autonomía de la élite política dirigente respecto de la ciudadanía. La diferencia en ambos países es que en Brasil los derechos ciudadanos son más respetados y reconocidos por el gobierno y están enmarcados en una constitución reciente (1988) que establece con claridad el derecho a tener derechos y contiene mecanismos para hacerlos funcionar en la práctica, en tanto que en México los derechos ciudadanos se aplican básicamente al ámbito electoral en el que ocurren continuos y recurrentes cuestionamientos por la persistencia de mecanismos de fraude electoral. La autonomía de las instituciones políticas no es tanto respecto a los intereses particulares, pues éstas están abiertas a la presión de los grandes intereses económicos y de los

medios de comunicación, sino que es una autonomía respecto de los ciudadanos. Esa autonomización de la sociedad civil se ha ampliado en México con el nuevo gobierno al punto de estar aplicando una política de seguridad militarizada supuestamente democrática que conlleva el involucramiento creciente del ejército en la vida del Estado bajo la justificación del combate al narcotráfico y el contrabando.

En Brasil y México desde 1994 se registra también, además de la acción política ciudadana para influir en la situación electoral institucional, la acentuación de la acción política no institucional de movimientos sociales de importancia política, el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Movimiento indígena y militar por la democracia, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Mientras que el proyecto de gobierno del presidente Lula da Silva, eje programático y político dominante de la sociedad política de Brasil hoy día, refrendado por la reciente reelección presidencial, tiende a ser un proyecto neodesarrollista y nacionalista conviviente con la orientación económica neoliberal, la sociedad civil parece tener expresiones políticas que no son aceptadas en la vida del Estado. En los últimos años se han desplegado una diversidad de movimientos ciudadanos urbanos de protesta y de lucha por derechos como los de vivienda, trabajo, seguridad y participación, que en conjunto con la lucha del movimiento de los trabajadores sin-tierra (MST) muestran una sociedad civil popular amplia que tiene una relación crítica con el proyecto del PT y reclama por lo que siente como falta de cumplimiento de la constitución en lo relativo a la reforma agraria y por su exclusión en la elaboración política institucional del proyecto de cambio (Nogueira; 2005).

En México la sociedad política dominante está bajo la dirección de un proyecto neoconservador neoliberal que entiende a la democracia como representación que delega a los parlamentarios la iniciativa y la autoridad y que asume la gobernabilidad autoritaria, incluso a costa de la ilegitimidad del proyecto. Hay también un rechazo abierto de los reclamos históricos de la sociedad civil de transparentar las instituciones electorales, no obstante que se han aprobado algunas reformas políticas menores para evitar que los partidos políticos estén en manos de los medios de comunicación.

Salvando las diferencias, estudiamos conjuntamente Brasil y México porque encontramos en ambos casos un *impasse* de las luchas ciudadanas y de los movimientos sociales, como entidades de la sociedad civil popular, que la sociedad política no incluye en la elaboración y legitimación de sus proyectos. Veamos con mayor detenimiento la situación de cada país.

BRASIL

En Brasil el gobierno reformador del presidente Lula da Silva no alteró suficientemente el régimen político, lo cual ha mantenido una continuidad del Estado autoritario heredado. No obstante que el proyecto nacional del presidente Lula da Silva sea distinto al de Cardoso, no es tampoco una alternativa al neoliberalismo desde el punto de vista del desarrollo político popular: su proyecto que puede ser caracterizado de neodesarrollismo nacional y liberal⁸, además de que, como se ha comentado, se basa en mantener continuidad con el patrón arcaico y “delegativo” clientelar de las instituciones tradicionales del Estado, se sustenta en mantener el comportamiento apolítico de la sociedad civil. En ese sentido hay elementos para pensar que la crisis orgánica del Estado ampliado brasileño, basada en que el Estado no expresa a la sociedad plenamente, no está cabalmente resuelta hoy día, tal como se manifiesta en la persistencia de la lucha del MST y en la recurrente agrupación de los movimientos sociales para exigir transformaciones profundas del Estado. La perspectiva de Nelson Coutinho (2000) alude a que en Brasil del 2002 se confrontaban dos proyectos definidos y que pueden ser caracterizados como el proyecto nacional de democracia de masas versus el proyecto de liberalismo burocrático de Cardoso. Este planteamiento de Coutinho puede considerarse equivocado si tomamos en cuenta que después de un período de cuatro años de gobierno y a un año del segundo período, el posicionamiento de Lula por la reforma política del estado es extremadamente limitado y deja de lado la ciudadanización de la política; el PT y su gobierno no tienen un proyecto de desarrollo político de la sociedad civil y por lo tanto tampoco de “democracia de masas”, tal como lo demostró la crisis ética y política del 2004 al 2006. Además el concepto de de “democracia de masas” de Coutinho es discutible en sí mismo pues tiene como referencia las opciones políticas de los Estados del fordismo periférico y no a la lucha actual en que el gran problema es como desarrollar el empoderamiento de la sociedad civil popular, profundizar

8 En otro trabajo esclarecí mi apreciación sobre el proyecto nacional desarrollista y socialdemócrata de Lula: “El proyecto social-demócrata de reformas profundas propone, entre otras orientaciones estratégicas: 1) mayor autonomía relativa en la inserción de Brasil en la globalización; 2) retomada del papel estratégico del Estado en la conducción de la economía nacional, mezclando el fomento a las exportaciones con la revitalización del mercado interno, hasta llegar inclusive a pensarse en un nuevo modelo económico, sin que esté claro aún sobre qué parámetros sería construido; 3) la recuperación de mayores espacios de soberanía nacional por la definición interna de las políticas de seguridad alimentaria y por los avances de la integración latinoamericana y del MERCOSUR; 4) nuevas políticas para incidir con soluciones reales en la cuestión social, eje central de la orientación del gobierno para con los excluidos” (Oliver, 2005: 43)

la democracia participativa y abrir espacio a lo público determinado por la sociedad.

Hay una crisis latente en Brasil porque el actual Estado ampliado neodesarrollista sigue siendo elitista y no resuelve la agenda política, las demandas y el reclamo de derechos plenos a la participación y a la definición de lo público por parte de las luchas sociales y los movimientos sociales de la ciudad y el campo⁹: de ahí la distancia creciente con Lula de corrientes de izquierda del PT y de la CUT, sectores de clase media de izquierda, Corrientes de cristianos de base asociadas con la Conferencia de los Obispos, Movimientos de Barrios y Favelas, sectores intelectuales y universitarios antineoliberales herederos de las luchas ciudadanas por la ciudadanía y contra el hambre, movimientos por el poder ciudadano participativo local, Movimiento de los Sin Techo y Sin Trabajo, Movimiento de Trabajadores Sin-tierra, Sectores en lucha por la reforma agraria¹⁰. Un aspecto interesante es la lucha de los movimientos sociales brasileños para reclamar participación política en la determinación de lo público no sólo en el nivel del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales que son aun más elitistas:

Ahora se da algo nuevo, no en el reino de Dinamarca, sino en la democracia brasileña: el control del poder público municipal por la sociedad civil. En vísperas de la elección de nuevos alcaldes, la iniciativa merece ser reproducida en todo el Brasil. Se trata del Movimiento Nuestra São Paulo. Sin carácter partidario, congrega a casi 450 movimientos sociales e instituciones interesadas en mejorar la calidad de vida de la mayor metrópoli brasileña y de reducir el abismo entre el gobierno municipal y la población, fortaleciendo la democracia participativa. [...] Quiera Dios –y los electores– que esa moda tenga éxito. Así estaremos elevando el nivel de la democracia brasileña, haciéndola verdaderamente participativa. (Frei Betto, 2008)

Por lo antes dicho podemos apreciar que el gobierno progresista de Lula tiene limitaciones para asumir lo que los movimientos sociales han puesto sobre el tapete respecto de los obstáculos conservadores al desarrollo democrático participativo de Brasil:

9 Véase el excelente artículo del fallecido miembro de RUPAL (2004), Elenaldo Celso Teixeira, escrito en la Universidad Federal de Bahía, “La participación ciudadana en el poder local en Brasil, algunas experiencias” <<http://habitat.aq.upm.es/boletín/n3/aecel.html>>.

10 Véase la Carta al Pueblo de la Unificación de los Movimientos Sociales de Brasil, emitida a partir de 2004 y refrendada antes de la reelección.

Cinco instituciones principales del sistema político brasileño forman el entramado de redes conservadoras de poder tradicional:

- el sistema judicial, que se asume como una institución retrógrada e intocable y que fue criticada por el propio Lula al inicio de su gobierno –quien anunció una iniciativa a futuro para someter a la institución al control externo–;
- el Gabinete Económico, con capacidad propia de decisión sobre asuntos de política económica externa, fiscal, regulatoria y monetaria;
- el Banco Central, que goza prácticamente de autonomía jurídica.
- Las instituciones 2 y 3 mantienen una situación de privilegio, resultado de la herencia del pasado, producto de la exigencia de los organismos financieros internacionales (FMI y BIRD), así como de la concepción elitista del propio PT, que considera a la política económica como un asunto de especialistas;
- las Cámaras de Diputados y Senadores, cuya vida política aún no es fiscalizada ni es controlada por la sociedad, y, por el contrario, se asumen como un poder sobre y fuera de ésta;
- el poder autónomo de Gobernadores y Presidentes municipales, los cuales también tienen autonomía para establecer autoritariamente orientaciones y políticas, aun cuando en Brasil, el poder ejecutivo nacional esté, cada vez más, bajo la crítica de la opinión pública y bajo el control relativo de las propias Cámaras políticas”¹¹

Lo anterior nos da un marco de referencia para considerar que la crisis orgánica del Estado en Brasil persiste y las dificultades del gobierno del presidente Lula para resolver esa crisis.

MÉXICO

El gobierno del presidente Calderón ha profundizado la crisis del Estado ampliado heredado del régimen de Partido de Estado, crisis ya evidenciada anteriormente, en 1988, con el fraude de Estado dirigido por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, para evitar el triunfo del político opositor, Cuauhtémoc Cárdenas; política continuada en 1994 ante la aparición y luchas del EZLN, remozada con la alternancia del PAN empresarial, sin que bajo el gobierno

11 Esta relación de cuáles son, según mi análisis de lo expresado por los movimientos sociales, los obstáculos para el desarrollo político, la expresé en el artículo “Pensando o Estado: sociedade política e sociedade civil hoje, no Brasil e no México” (Oliver, 2005: 45).

de Fox se hubiese llevado a cabo una reforma institucional del Estado o la creación de nuevas instituciones para la participación de los sectores populares de la sociedad civil en la determinación de lo público, por lo que ese Estado ha sido recientemente cuestionado por un gran movimiento ciudadano que exige derechos, nación, justicia y nuevas instituciones: el movimiento que se expresó como movilización contra el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, primero, por el movimiento de la Convención Nacional Democrática contra el fraude electoral de 2006, posteriormente y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que puso el acento en el carácter oligárquico y elitista de los gobiernos estatal y federal.

Bajo el actual presidente Calderón, la política de seguridad pública militarista contra el narcotráfico y la delincuencia, por un lado, y la política económica que busca profundizar su carácter neoliberal, basada en crear las condiciones para aumentar el flujo de inversiones externas y de privatizaciones estratégicas, profundiza la crisis orgánica del Estado ampliado mexicano. La reciente reforma política electoral que impide la propaganda política privada en los medios de comunicación, propuesta y aprobada recientemente, si bien resuelve el control privado del aparato electoral por los empresarios, no altera aún el corazón de la institucionalidad cerrada del Estado ampliado heredada, basada en la existencia de un régimen de falta de derechos ciudadanos plenos, en el que el poder gubernamental tiene excesivas prerrogativas, el poder judicial está subordinado al ejecutivo y en el que los ciudadanos no tienen derechos para constituir una representación en las cámaras sin pasar por los partidos políticos institucionales.

El dictamen del Tribunal Electoral de la Federación sobre las elecciones del 2006 en el sentido de que efectivamente hubo abuso del poder del Estado pero resulta imposible determinar cómo afectó en los resultados electorales, contribuyó a crear en la sociedad civil una distancia significativa con la sociedad política dominante y ratifica la existencia de una crisis. Por otra parte si bien la lucha democrática del EZLN ha disminuido de intensidad y se ha reorientado hacia una lucha anticapitalista, su lucha por los derechos indígenas sigue convocando a la sociedad en general en contra de lo aprobado por el parlamento en 2002.

LA RELACIÓN DE FUERZAS

¿Cómo establecer en el contexto de las dos experiencias analizadas una caracterización de la relación de fuerzas, sobre todo observando que en lo inmediato se trata de fuerzas con una historia particular en

cada país, además de que actualmente están en relación con la presencia de gobiernos con distinta orientación político-estratégica?

En el caso de Brasil la fuerza del PT y del Gobierno de Lula es radicalmente distinta a la del PSDB y del Gobierno anterior de Henrique Cardoso, en la medida en que expresa la presencia predominante de un partido de trabajadores en la sociedad política, en tanto Cardoso expresaba la fuerza gobernante de los empresarios y la oligarquía agroexportadora. El PT es, por una parte, una fuerza de origen y característica popular que alcanzó el gobierno por vía de un triunfo electoral. Bajo el dominio del gobierno neoliberal anterior fungía como oposición radical de izquierda, crítica de la política económica y de la orientación general del Estado. El gobierno de Lula expresa la conquista del gobierno por parte de una fuerza popular que se asienta en los trabajadores urbanos y suburbanos del sur, sureste, occidente y nordeste del país, con un apoyo también en los excluidos y oprimidos de las áreas marginadas urbanas de Brasil. Sin embargo el programa actual de gobierno, las alianzas y la conducción del PT y de Lula como actores políticos no parece expresar todavía la autonomía del movimiento popular ni una hegemonía alternativa. Como dice Gramsci:

Un segundo momento es aquél en el que se alcanza la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo social pero todavía sólo en el campo meramente económico. Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el terreno de alcanzar una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, porque se reivindica el derecho de participación en la legislación y en la administración y tal vez incluso de modificarlas, de reformarlas, pero en los cuadros fundamentales existentes (Gramsci, 1999, cuaderno 13, nota 17: 36).

Considero que la clave de la caracterización de la propuesta analítica de Gramsci está justamente en la última frase: "Se plantea la cuestión del Estado... pero en los cuadros fundamentales existentes". Éstos en el Brasil actual son, en la economía, la acumulación de capital bajo la dirección de los grandes monopolios nacionales y transnacionales de las urbes y del campo; en la política, la dirección política a partir de las instituciones existentes que separan economía y política, expresan los candados políticos burocrático-oligárquicos, excluyen la democracia participativa y la construcción social de lo público; en la cultura, la vida social se sigue entendiendo a partir del dominio de las relaciones mercantiles. No hay autonomía real en el PT ni en Lula en la medida en que no hay una crítica radical de los ámbitos mencionados que permita una perspectiva propia, original, histórica y crítica de un horizonte de trabajadores brasileños en esos tres aspectos. Por lo

tanto no se puede plantear realmente la cuestión de que el PT y Lula sean una fuerza hegemónica alternativa en la medida en que no tienen su propio proyecto de sociedad y de país por lo cual su dirección sobre el conjunto de la sociedad no tiene una perspectiva de transformación profunda. Ello independientemente de que la política del gobierno si implica cambios positivos en la vida política, económica y social inmediata, entre otros, el presidente Lula ha estimulado el mercado interno, un mayor poder de consumo de las clases pobres excluidas, una vida política más respetuosa de los derechos civiles, una relación política de negociación del gobierno hacia los trabajadores y una política internacional más soberana (Frei Betto, 2006). Otro ángulo para apreciar los límites de la dirección política de Lula ubicada en los cuadros fundamentalmente existentes es que no se ha apuntado ni siquiera el problema de la democratización de los medios de comunicación, la crítica del dominio financiero de la economía brasileña, ni la reforma agraria popular, cuestiones que podrían proponerse en el marco de la propia constitución de 1988 pero sugerirían el desarrollo autónomo de una fuerza popular. Un elemento que muestra el que no hay autonomía ni proyecto de hegemonía alternativo es también el que el proyecto del gobierno Lula no se plantea enfrentar y desmontar la estructura de dominación social ni la estructura de poder existente en la vida social y política brasileña (Frei Betto, 2006). El poder en Brasil sigue bajo el mando de los empresarios y la oligarquía, aun cuando se tenga que compartir con los trabajadores en términos de repartición de cuotas de un poder capitalista dominante. Así, no hay en Brasil una situación de hegemonía propia de los trabajadores, en la cual,

El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del grupo mismo, pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales (Gramsci, 1999, Cuaderno 13, nota 17: 37)

En México la situación está determinada por una especie de empate catastrófico entre la fuerza histórica de la derecha empresarial que ha creado su propia influencia modernizante conservadora en la sociedad (el *American way of life* y el reaccionarismo conservador mexicano), especialmente en el centro-norte del país, ha conquistado el gobierno y que despliega crecientemente el poder del aparato militar y burocrático para mantener al país bajo el dominio transnacional y neoligárquico, y un movimiento social popular progresista dirigido por una corriente nacionalista popular que reivindica la atención a los pobres

y los planteamientos de la vieja constitución de 1917 y que tiene experiencia en administrar en forma moderna la capital del país. Esta fuerza popular tiene su asiento principal en la memoria histórica del pueblo mexicano, en la estructura política de un frente de partidos progresistas (PRD, FAP), y en caudillos populares que han encabezado la actuación política frente a los partidos del orden (PAN-PRI), Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Esta fuerza popular tampoco tiene la autonomía necesaria para expresar la crítica histórica profunda del capitalismo mexicano y de las instituciones estatales que se desarrollaron bajo el proyecto del Estado de la revolución mexicana en la medida en que no plantea la crítica profunda del proyecto capitalista dominante ni cuenta con una apreciación de ruptura con el elitismo político existente. Sin embargo es una fuerza que tiene a su favor el que está en “movimiento” y que por la confrontación política contra la fuerza empresarial modernizadora reaccionaria se ha planteado los problemas del desarrollo de una economía nacional popular, de la ciudadanía, de lo público y de nuevas instituciones políticas y que en ese proceso podría desplegar un avance autonómico y un planteamiento hegemónico propio, que sin embargo, no parece estar en el horizonte de la dirección actual de ese movimiento popular.

Lo que hay de común en la situación de Brasil dirigida por una fuerza progresista sin hegemonía y la situación de México dirigida por una fuerza modernizadora reaccionaria sin hegemonía propia, es que el Estado se contrapone a la sociedad debido al carácter autoritario de las fuerzas dominantes, contraposición que tiene como rasgo básico la exclusión de la participación autónoma de la sociedad civil popular en la conducción de la política. Así, incluso en el Brasil en donde un representante político de una fuerza popular amplia está en la presidencia, se trata sin embargo de un político que hace política elitista y autoritaria en los marcos de una institucionalidad política retrógrada, que dirige una fuerza gobiernista que obstaculiza el desarrollo de una fuerza sociopolítica independiente y anclada en la ciudadanía participativa y en los movimientos sociales.

En Brasil y México existe, por lo tanto, una contraposición de fuerzas en el Estado ampliado, sin que se haya abierto paso una nueva fuerza que procure la democracia popular radical con proyecto nacional y que proponga lo público societal versus las fuerzas transnacionalizadoras dominantes que defienden el Estado nacional de competencia, con concepciones burocratizantes.

Habrà que buscar con mayor precisión las determinaciones de la correlación de fuerzas en Brasil y México en el contexto de la persistencia de la crisis orgánica del Estado. Para ello la temática a desarrollar en próximos análisis son los componentes y los ejes de la

actual lucha por la autonomía y la hegemonía de las fuerzas nacional-populares en ambos casos.

En otro trabajo ya mencioné, con relación al Brasil, pero podría aplicarse en algunos aspectos también a México, cuáles son, según mi punto de vista, los ejes de la lucha por una hegemonía alternativa, cuestión que ya no pertenece tanto al análisis de lo concreto, labor del sociólogo, sino a la exposición de las utopías, opción de la academia comprometida:

elevación de la organización política y de la conciencia teórica de los trabajadores, alejamiento del gobierno de los burócratas neoliberales, incorporación al gobierno de los representantes de los trabajadores rurales, actualmente en lucha en la oposición, enfrentamiento a las redes conservadoras del poder, reforma y desarrollo de la sociedad civil popular. Todo ello resulta necesario para la profundización democrática que posibilite a los trabajadores el convertirse en un verdadero poder interno nacional, regional e internacional, que los haga capaces de enfrentar, en condiciones más favorables, la lucha interna por el poder contra la estructura social actual y de frente a las políticas del capital nacional e internacional, así como la lucha internacional por la redefinición democrática del poder en las relaciones internacionales. En el proceso abierto hoy en Brasil, es importante crear conciencia de la necesidad de continuar con los cambios de la sociedad política y de la sociedad civil, las cuales articuladas tienen mayor efectividad [...] (para ello) el Estado político brasileño, como los Estados latinoamericanos, aún cuentan con un recurso fundamental, el político, el hecho de que son expresión del interés público [...] Pero está claro que ningún proyecto resulta suficiente si sólo está anclado en la administración pública y en la sociedad política. Por ello el problema central no parece ser sólo la ausencia de un programa más radical de medidas, o de políticas esenciales de cambio por parte del gobierno de Lula. El radicalismo necesario, hoy día, parece no encontrarse sólo en las políticas de ruptura económica. El nudo de la cuestión está en otro radicalismo mucho más necesario para la sociedad y para el gobierno: la alianza con la sociedad civil que transforme la correlación general de fuerzas y posibilite el cambio esperado, la transformación de lo local en lo global y de lo global en lo local (Oliver, 2005: 23-56).

Resolver los problemas mencionados es parte de la lucha por la hegemonía de las fuerzas nacional-populares en Brasil y México. Así, para concluir este capítulo podemos retomar lo dicho arriba: el problema no parece ser la limitada concepción de las élites, ni siquiera de las élites reformadoras, sino la “insuficiencia” del grado de organización y desarrollo político de las fuerzas organizadas del poder popular.

BIBLIOGRAFÍA

- Azzellini, Darío 2008 “¿Hacia dónde va Venezuela?” en *Metapolítica* (México) Vol. 12, N° 59, mayo-junio.
- Briceño-León, Roberto 2008 “Los límites del socialismo rentista venezolano” en *Metapolítica* (México) Vol. 12, N° 59, mayo-junio.
- “Carta al Pueblo de la Unificación de los Movimientos Sociales de Brasil” 2004.
- Correa, Rafael 2008 “Discurso en el 50 aniversario de FLACSO Ecuador” en *Crítica y Emancipación* (Argentina: CLACSO) Año 1, vol. 1, número 1, junio.
- Coutinho, Nelson 2000 “El concepto de sociedad civil en Gramsci y la lucha ideológica en el Brasil de hoy” en Kanoussi, Dora (comp.) *Gramsci en América. II Conferencia internacional de estudios gramscianos* (México: Ed. Antonio Gramsci, A.C. / Ed. Plaza y Valdés).
- Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto J. y Panfichi, Aldo (coords.) 2006 *La disputa por la construcción democrática en América Latina* (México: Fondo de Cultura Económica/Universidad Veracruzana).
- Dagnino, Evelina (coord.) 2002 *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Elías, Antonio 2007 “Uruguay: un gobierno en disputa” en Stolowicz, Beatriz (coord.) 2008 *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político*. (México: Autora).
- Frei Betto 2006 *A mosca azul. Reflexão sobre o poder* (Río de Janeiro: Ed. Rocco).
- Frei Betto 2008 “Control social de las alcaldías” en Agencia Latino Americana de Información, consultado el 14 de julio DE 2008 en: <<http://alainet.org/active/25227&lang=es>>.
- García Linera, Álvaro 2008 “Empate catastrófico y punto de bifurcación” en *Crítica y Emancipación* (Buenos Aires: CLACSO), Año 1, Vol. 1, N° 1, junio.
- Gramsci, Antonio 1999 *Cuadernos de la Cárcel* (México: Ed. Era) Tomo V, Cuadernos 13 y 19.
- Gutiérrez, Raquel y Mokrani, Dunia 2008 “Bolivia a un año de gobierno de Evo Morales: elementos para un balance” en López Castellanos, Nayar y Oliver, Lucio (coords.) *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales* (México: Ed. Plaza y Valdés) (en prensa).

- Hirsch, Joachim 1996 *Estado, capital y globalización* (México: UAM-Xochimilco).
- Hirsch, Joachim 2002 *El Estado nacional de competencia* (México: UAM-Iztapalapa).
- Korol, Claudia 2007 “La formación política de los movimientos populares latinoamericanos” en *Observatorio Social de América Latina (OSAL)* (Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), N° 22, septiembre.
- Lander, Edgardo 2007 “Venezuela: logros y tensiones en los primeros ocho años del proceso de cambio” en Stolowicz, Beatriz (coord.) *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político* (México: Ed. Autora).
- López Castellanos, Nayar y Oliver, Lucio (coords.) 2008 *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales* (México: Ed. Plaza y Valdés) (en prensa).
- López Maya, Margarita 2004 “Insurrecciones de 2002 en Venezuela: causas e implicaciones” en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: FLACSO) capítulo I.
- Meyer, Lorenzo 2007 *El espejismo democrático. De la euforia del cambio a la continuidad* (México: Ed. Océano).
- Moldiz Mercado, Hugo 2007 “Bolivia: crisis estatal y proceso de transformación” en Stolowicz, Beatriz (coord.) *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político* (México: Ed. Autora).
- Nobre, María Cristina de Queiroz 2008 *Modernização do atraso: a hegemonia burguesa do CIC e as alianças elitórias da “era” Tasso*, Tesis de doctorado, Posgrado en Sociología, UFC, Brasil.
- Nogueira, Marco Aurélio 2005 *Um Estado para a Sociedade Civil. Temas éticos e políticos da gestão democrática* (Brasil: Ed. Cortez).
- Oliver, Lucio y Castro, Teresa (coords.) 2005 *Poder y política en América Latina* (México: Siglo XXI).
- Oliver, Lucio 2005 “Pensando o Estado: sociedade política e sociedade civil hoje, no Brasil e no México” en Neto Carleial, Adelita (org.) *Projetos nacionais e conflitos na América Latina* (Fortaleza: Ed. UFC/ UECE/ UNAM).
- Osorio, Jaime 2008 *América Latina: explotación redoblada y actualidad de la revolución. Refundación societal, rearticulación popular y nuevo autoritarismo*. (México: UAM-Xochimilco) (en prensa).

- Ouriques, Nildo 2007 “El péndulo latinoamericano hacia la izquierda”, en *Nostrumus. Revista crítica latinoamericana* (México: El Colegio de Chihuahua/ UNAM/ PUMC) N° 1.
- Prada Alcoreza, Raúl 2008 “Análisis de la nueva Constitución Política del Estado” en *Revista Crítica y Emancipación* (Buenos Aires: CLACSO) Año 1, N° 1, junio.
- Prada, Raúl 2008 Entrevista en el documental boliviano, “*El estado de las cosas*”.
- Rodas Chávez, Germán 2007 “El caso ecuatoriano” en Stolowicz, Beatriz (coord.) *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político* (México: Ed. Autora).
- Rodríguez Mora, Tania 2008 “La continuidad y las promesas de ruptura: una mirada histórica para evaluar el primer gobierno de Lula” en López Castellanos y Oliver, Lucio (coords.) 2008 *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales* (México: Ed. Plaza y Valdés) (en prensa).
- Seoane, José; Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2006 “Las nuevas configuraciones de los movimientos populares en América Latina” en Borón, Atilio A. y Lechini, Gladys *Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina* (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) junio.
- Sotelo, Adrián 2007 *El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura social en la década de 2000* (México: Ed. Plaza y Valdés).
- Stefanoni, Pablo 2008 “Bolivia ¿en un punto de bifurcación?” en *Metapolítica*, (México) Vol. 12, N° 59, mayo-junio.
- Stolowicz, Beatriz (coord.) 2007 *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político* (México: Ed. Autora).
- Svampa, Maristella 2005 *La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo* (Buenos Aires: Editorial Taurus).
- Tapia, Luis 2006 *La invención del núcleo común. Ciudadanía y gobierno multisocietal*. (Bolivia: Muela del Diablo Editores).
- Turra, Julio 2008 “Lula en Brasil: un gobierno en contradicción con su base social” en Stolowicz, Beatriz (coord.) *Gobiernos de izquierda en América Latina. Un balance político* (México: Ed. Autora).
- Vargas, Humberto y Córdova E., Eduardo 2004 “Bolivia: un país de reconfiguraciones. Por una cultura de pactos políticos y de conflictos” en Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, (Buenos Aires: FLACSO).

Velázquez, Marco 2008 “Venezuela, el margen a la Historia Latinoamericana” en López Castellanos, Nayar y Oliver, Lucio (coords.) *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales* (México: Ed. Plaza y Valdés) (en prensa).